**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 5661/2001 del Tribunal
Supremo, de 11 de marzo de 2004 (Semillas Batlle, SA contra
Administración del Estado)**

1. Antecedentes de hecho

La entidad Semillas Batlle, SA planteó un recurso contencioso-administrativo contra una Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por acto presunto negativo, relativa a la solicitud de título de Obtención Vegetal e inscripción en el Registro de variedades Protegidas, para la variedad de trigo duro denominada VITROMAX. El recurso fue rechazado y contra esta decisión se planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso planteado estaba basado en un único motivo, la infracción de los arts. 42, 43 y 44 de la Ley 30/1992, referidas al plazo para dictar resolución en supuestos como el de este caso y el carácter estimatorio o desestimatorio del acto presunto.

El Tribunal Supremo rechazó el motivo del recurso y condenó a la recurrente al pago de las costas procesales.

En relación con la cuestión del plazo para dictar resolución, el Tribunal Supremo declaró que la Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1978 reguladora de la materia, preveía que los ensayos de campo del cultivo de la variedad de semillas han de durar un mínimo de dos años, sin que se pudiera aplicar el plazo común de tres meses como pretendía la recurrente.

No obstante lo anterior, dado que el Art. 9 c) de la citada Orden dispone que si se trata de solicitudes del título de obtención e inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, y se encuentran pendientes de resolución solicitudes anteriores de inscripción en el Registro de Variedades Comerciales, se tendrán en cuenta los resultados técnicos y experimentales ya obtenidos. La recurrente alegó que puesto que en 1994 se presentó una solicitud de inscripción en el Registro de Variedades Comerciales, transcurridos dos años sin resolución expresa cobraría de nuevo vigencia el plazo general de tres meses para resolver.

El Tribunal Supremo no admitió el argumento anterior, porque constaba en el informe al que se remitía la sentencia recurrida que los exámenes técnicos y ensayos de campo se habían hecho a partir de la solicitud de inscripción en el Registro de Variedades Comerciales, arrojando las mismas un resultado negativo, de manera que no fue posible dictar una resolución estimatoria y acordar la inscripción en el Registro partiendo de

dicho resultado a la vista de la legislación aplicable sobre protección vegetal.

En opinión del Tribunal Supremo, en un supuesto como este que requiere ensayos y cultivos experimentales, así como el informe preceptivo del Registro de la Propiedad Industrial, el plazo no puede determinarse a priori, sino que el plazo general de tres meses debe computarse a partir del momento en que los trámites procedimentales y ensayos técnicos hayan concluido.

En cuanto al carácter estimatorio o desestimatorio del silencio de la Administración, la sentencia recurrida determinó que el mismo debía entenderse en sentido negativo en virtud del Art. 43.2 b) de la Ley 30/1992 por no existir derechos preexistentes y porque su admisión supondría transmitir facultades inherentes al dominio público. Desde el punto de vista de la recurrente, dichos argumentos eran erróneos porque el Registro de Variedades Protegidas no tiene carácter constitutivo de acuerdo con la STS de 19 de noviembre de 1984, y porque los particulares tienen un derecho preexistente a que se les otorgara el título de obtención y la inscripción en dicho Registro.

El Tribunal Supremo replicó que esa argumentación de la recurrente no podía ser admitida. El citado Art. 43.2 b) en este caso debe dar lugar a entender ese acto presunto de la Administración en sentido negativo, pues no existía un derecho preexistente sino una expectativa de derecho y no se transferirían facultades sobre el dominio público, sino en su caso, se otorgaría un derecho de utilización de ciertos elementos del dominio público, en este caso la especie vegetal, en los cuales se introduce una mejora. Además, según el Tribunal Supremo el Registro de Variedades Protegidas sí tiene carácter constitutivo, pues antes de la inscripción en el mismo los particulares tienen una simple expectativa pero en ningún caso un derecho subjetivo.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un caso referido al proceso de concesión de una obtención vegetal, la duración del procedimiento y el sentido que había que darle al silencio administrativo. Se trata de un supuesto al que le era de aplicación la ya derogada Ley 12/1975, de protección de las obtenciones vegetales.

La protección de las variedades vegetales da lugar a un derecho subjetivo, de igual naturaleza que otras modalidades de propiedad industrial aunque con características particulares. Este título confiere a su titular unos derechos exclusivos referidos al material vegetal de la variedad así protegida, de tal forma que sólo el titular está facultado para reproducir, producir o comercializar ese material. Se trata por tanto de un derecho conferido por una autoridad pública tras un procedimiento de concesión, tal y como ocurre con otros derechos de propiedad industrial.

En el caso de España, el procedimiento de concesión se encomendó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El procedimiento de concesión previsto para la variedad vegetal de este caso fue regulado por la Orden de 16 de noviembre de 1978, que estableció la protección para nuevas obtenciones de patata, la cual preveía que la

variedad sería sometida a un examen técnico que tendría una duración de dos años, consistente en el cultivo de la variedad y la verificación de que reúne las características descritas por el solicitante y los requisitos legalmente establecidos.

El problema que se plantea en este caso tiene que ver con la duración del procedimiento y el valor que debe darse a la ausencia de respuesta por parte de la Administración. Según la recurrente, transcurrido el plazo general establecido por la Ley 30/1992 de tres meses para la resolución de procedimientos administrativos sin que la Administración hubiera manifestado nada al respecto de la concesión del título solicitado, debía entenderse que el mismo había sido otorgado.

El Tribunal Supremo precisó los términos de las normas previstas por la Orden mencionada, concretando que el plazo general de tres meses debía empezar a contarse transcurridos los preceptivos dos años de examen técnico. Asimismo el Tribunal Supremo entendió que en ningún caso debía entenderse que el silencio de la Administración equivalía a la concesión de la titularidad sobre la obtención vegetal. Posteriormente tales aspectos han sido regulados de forma expresa en la Ley 3/2000 de Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales, en la que se establece un plazo máximo de seis meses para emitir una resolución tras la realización durante dos años de los exámenes técnicos y precisa que la falta de pronunciamiento específico por la Administración sobre la concesión del título se entenderá como su denegación. A la vista del presente caso, esta última Ley ha supuesto un gran avance en la práctica pues ha conseguido elevar el grado de seguridad jurídica con respecto a la regulación contemplada por la Ley 12/1975 y la Orden de 16 de noviembre de 1978.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841_L30.1992.pdf

Ley 12/1975, de protección de las obtenciones vegetales:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1366630234_es063es.pdf

Ley 3/2000, de 7 de Enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001409_F2-IP-ES-Ley%20de%20regimen%20de%20obtencion%20de%20vegetales-ene2000.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2991

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.